

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Exp. 004-2018-00526-02

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el mandatario judicial de PORVENIR S.A. frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó ADOLFO LEÓN VILLADA CORRALES en su contra y de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.

ANTECEDENTES:

En sentencia proferida el 11 de agosto de 2021 el juez de primera instancia, declaró la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que realizó el demandante, disponiendo el regreso automático al régimen de prima media, y la reactivación de la afiliación sin solución de continuidad, e impuso las costas procesales a Porvenir S.A, fijando las agencias en derecho en la suma de \$3.500.000. Esta decisión, se mantuvo en segunda instancia, adicionándola en el sentido que tanto PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A., deberán también devolver no solo lo deducido para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y gastos de administración, sino también lo correspondiente a seguros previsionales y demás conceptos descontados, con imposición de costas a cargo de Porvenir S.A y Protección S.A en el equivalente a un SMLMV.

Con estos referentes se aprobó la liquidación de costas por auto del 24 de marzo de 2023, atribuyendo a Porvenir S.A unas costas por el total de \$4.500.000, decisión frente a la cual el apoderado de Porvenir S.A expresó su inconformidad, interponiendo el recurso de apelación manifestando que conforme a lo que dispone el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 debe tenerse en consideración la naturaleza del proceso, su calidad y duración, señalando que en este caso la demanda fue notificada en agosto de 2018 y el 11 de agosto se profirió la decisión de primer grado, señalando que si bien se extendió 4 años, 1 mes y 12 días, no es atribuible a la sociedad, además que su naturaleza es de complejidad mínima y no requiere de mayor diligencia de parte de los apoderados, por lo que a su juicio debe revocarse la decisión para que se fijen las agencias en derecho de manera más equitativa y razonable y que corresponde en justa medida a la labor jurídica.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

De cara a los antecedentes, el problema jurídico en esta ocasión se circunscribe a determinar si es plausible o no disminuir el monto de las agencias en derecho, incluidas en el auto que aprobó la liquidación de costas.

Pues bien, por sabido se tiene que, para la estimación de las agencias en derecho, debe acudirse a las tarifas fijadas por los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, pues a estos remite el numeral 4º del artículo 365 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS; dicha disposición que regula los parámetros para la liquidación concentrada de costas, señala que si en los referidos acuerdos se establece un mínimo, o éste y un máximo, para la movilidad entre uno u otro limite, *el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó*

personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

El Acuerdo que aplica a este proceso es el PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, mismo que en su artículo 5º regula la tarifa de las agencias en derecho de primera instancia para los procesos declarativos sin cuantía, entre 1 y 10 SMLMV.

Vistas así las cosas, la Sala encuentra que en efecto el valor de \$3.500.000 pudiera cumplir el estándar de rangos dispuestos en el acuerdo, porque es cierto e indiscutido que para la fijación de las agencias en derecho los falladores deben acogerse a las tarifas dentro de los límites que allí se estipulan, pero también es verdad que debe mediar un ejercicio discrecional de ponderación, para que desde tales orientaciones se fije un monto que sea equitativo, razonable, prudente y proporcional, apreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, encontrando que la actuación de la parte promotora del juicio fue visible en la primera instancia, al promover el litigio con el escrito demandatorio y asistir a la diligencia concentrada que se celebró el 11 de agosto de 2021. En consecuencia, debe considerarse que si bien la duración de trámite en la primera instancia lo fue por tres años, el tema en litigio, ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia nacional, lo que hizo que su manejo no fuere complejo, situación misma que dio paso a la prosperidad de las pretensiones sin esfuerzos del representante judicial que excedan el mínimo de diligencia que debe adoptarse en su gestión, por lo que ponderando las circunstancias propias del proceso, se considera razonable que para la liquidación de las costas se rebajen las agencias en derecho fijadas en esa instancia a cargo de Porvenir S.A, pues aunque de 10 SMLMV plausibles, se otorgaron 3.85, si resulta meritorio en proporción no solo a la naturaleza del asunto, sino a la duración del proceso, proceder con su disminución en la suma de \$2.500.000 que corresponde a 2.75 SMLMV para la data de su fijación, con la que se permanece en el rango dispuesto por las reglas vigentes, y se atienden los criterios establecidos para definir la tarifa.

En consecuencia, conforme a estas breves pero precisas consideraciones y sin lugar a otras argumentaciones, se modificará el auto recurrido.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, MODIFICA el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, y en su lugar, impone por agencias en derecho de primera instancia la suma de \$2.500.000 a cargo de Porvenir S.A.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 073 fijados el 30 de abril de 2024, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.